



**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN**  
**SALA QUINTA DE DECISION LABORAL**

Proceso: Ordinario Laboral  
Radicación: 05001-31-05-002-2020-00270-01  
Demandante: Bernardo de Jesús Sánchez Velásquez  
Demandado: Colfondos Pensiones y Cesantías S.A., Marco Javier Gallego Caro y Ministerio de Hacienda y Crédito Público  
Asunto: Apelación sentencia  
Procedencia: Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín  
Magistrada ponente: Sandra María Rojas Manrique  
Temas: Cálculo actuarial, reliquidación pensión vejez

**Medellín, marzo veinticuatro (24) de dos mil veintitrés (2023)**

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, a decidir el recurso de apelación interpuesto por el señor apoderado de la parte demandante respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Diecinueve Laboral del Circuito de Medellín, el 10 de octubre del 2022, dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia instaurado por

el señor BERNARDO DE JESUS SANCHEZ VELASQUEZ en contra de la COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y el señor MARCO JAVIER GALLEGU CARO, en cual se integró el contradictorio con el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO Radicado 05001-31-05-002-2020-00270-01.

## **1.- ANTECEDENTES**

### **1.1.- DEMANDA**

El señor BERNARDO DE JESUS SANCHEZ VELASQUEZ, convocó a juicio laboral a COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS S.A., y al señor MARCO JAVIER GALLEGU CARO, pretendiendo, se declare que entre el accionante y el señor MARCO JAVIER GALEANO CARO, existió un contrato de trabajo a término indefinido desde el 22 de enero de 1999 hasta 12 de marzo de 2019, que este último es responsable la constitución de un título pensional, previo cálculo actuarial respecto del tiempo comprendido entre el 22 de enero de 1999 hasta el 30 de noviembre de 2009; consecuentemente se ordene a COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTIAS a recibir el título pensional y reconocer y pagar la garantía de pensión mínima de vejez al señor BERNARDO DE JESUS SANCHEZ VELASQUEZ de conformidad con el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, con el respectivo retroactivo pensional, los intereses moratorios del artículo 141 de la misma ley o en subsidio la indexación de las condenas

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el demandante, nació el día 22 de abril de 1950, que laboró al servicio del señor MARCO JAVIER GALEANO CARO, quien es el propietario del establecimiento de comercio denominado PINTUTÁL, en el periodo comprendido entre el 22 de enero de 1999 hasta el 12 de marzo de 2019, desempeñándose en el cargo de alistador y pulidor de carros, bajo una

remuneración salarial equivalente al mínimo legal de cada anualidad; que el vínculo laboral estuvo soportado inicialmente por un contrato de trabajo v término indefinido, sin embargo, para el mes de enero de 2007 firmó contrato de trabajo escrito a término fijo inferior a un año, para realizar el mismo cargo y funciones, desmejorando de manera injustificada sus condiciones laborales, que el pretensor ejecutaba las labores bajo la continuada subordinación y dependencia respecto a su empleador, por cuanto no existía independencia técnica, ya que los implementos de trabajo eran todos suministrados por el empleador, prestaba el servicio de manera personal en las instalaciones del establecimiento de comercio y cumplía un horario. Agrega que el señor MARCO JAVIER GALEANO CARO, solo afilió al trabajador a la seguridad social, a partir del mes de diciembre de 2009, realizando las cotizaciones en la AFP COLFONDOS S.A, sin embargo, el empleador no realizó el pago del título pensional por el periodo comprendido entre la fecha de inicio de la relación laboral y el 30 de noviembre de 2009, adeudando por éste periodo un total de 3900 días, equivalentes a 557,7 semanas de cotización en pensiones.

Se aduce que el actor se encuentra afiliado para el riesgo de vejez a COLFONDOS S.A, desde el 31 de mayo de 1997 y que analizada su historia laboral se puede verificar que se presentan varias inconsistencias, en los periodos enero, octubre de 2010; enero, mayo de 2011; julio, diciembre de 2012; mayo, octubre de 2013 y enero, febrero de 2016, para un faltante de 298 días; concluye que sumadas las semanas no cotizadas con las que efectivamente aparecen cotizadas, el demandante acredita los requisitos mínimos en semanas 1.156 y la edad para ser beneficiario de la garantía de pensión mínima de vejez, de conformidad con el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

## **1.2.- CONTESTACIÓN**

El codemandado **MARCO JAVIER GALLEGO CARO** dio respuesta al libelo incoativo (anexo 24), señalando que no es cierto el extremo inicial del vínculo laboral dado que el establecimiento de comercio sólo empezó a funcionar el 25 de julio de 2000, fecha en el que fue registrado en la Cámara de Comercio de Medellín, no le consta el vínculo laboral verbal, anterior al año 2007, aduce que si bien con la demanda fue aportada como prueba, una copia de un contrato individual de trabajo a término fijo inferior a un año, fechado presuntamente el 16 de enero de 2007, el mismo presenta inconsistencias; que no es cierto que la relación laboral fue constante o continua, dado que hubo varios ingresos y retiros durante la presunta relación laboral, tal como se acredita con las liquidaciones aportadas con la contestación de la demanda, que no le consta la afiliación a la seguridad social a partir del mes de diciembre de 2009, ni que estuviera obligado a afiliarlo desde fecha anterior.

Para enervar las excepciones propone las excepciones de mérito de prescripción parcial; falta de conducencia de la prueba testimonial; falta de pertinencia de la prueba testimonial; falta de causa para pedir parcial e inexistencia parcial de la obligación.

Por conducto de su representante legal y a través de apoderado, oportunamente **COLFONDOS S.A.** (anexo 09) dio respuesta al libelo introductorio, para afirmar que, salvo la afiliación del accionante a esa AFP, no le constan los hechos, se opone a las pretensiones y en su defensa formula las excepciones de mérito que denominó: ausencia de legitimación en la causa por pasiva; inexistencia de las obligaciones reclamadas y cobro de lo no debido; falta de título y causa del demandante; prescripción; compensación y pago; buena fe; la genérica y petición antes de tiempo.

**EL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**, vinculado al proceso como litisconsorte por pasiva, replicó el libelo inaugural, (anexo 13) manifestando que no le constan los hechos, razón por la cual se abstiene de

hacer algún tipo de pronunciamiento puntual respecto de hechos que versen sobre aspectos de índole personal del demandante, correspondiendo a éste probar lo manifestado, enfatizando que la AFP COLFONDOS no ha solicitado en nombre de su afiliado y demandante en este proceso, el reconocimiento de la Garantía de Pensión Mínima ante la Oficina de Bonos Pensionales (OBP) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público

En oposición a las pretensiones formuló las excepciones de buena fe y la genérica.

### **1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO**

Mediante fallo proferido el 10 de octubre del año 2022, el Juzgado de conocimiento declaró que, entre el señor, BERNANDO DE JESÚS SANCHEZ VELASQUEZ, como empleado, y MARCO JAVIER GALEANO CARO, como empleador, existieron los siguientes contratos de trabajo: Contrato a término fijo del 2 de enero de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2007; contrato a término indefinido del 5 de enero de 2011, hasta el 27 de diciembre de 2013; contrato a término indefinido del 4 de enero de 2016 hasta el 12 de marzo de 2019; condenó al señor MARCO JAVIER GALEANO CARO, a realizar el pago de los aportes en pensiones del señor BERNANDO DE JESÚS SANCHEZ VELASQUEZ, durante los siguientes periodos, con base en un IBC del SMLMV: Del 2 de enero de 2007, hasta el 31 de diciembre de 2007; octubre de 2011, 30 días; Julio y diciembre de 2012, 60 días; mayo y octubre de 2013, 60 días, dispuso que la carga impuesta deberá cumplirla el demandado MARCO JAVIER GALEANO, acercándose a la AFP COLFONDOS o la AFP en la que se encuentre afiliado el demandante, dentro de los 30 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia, solicitando el cálculo del título pensional por los periodos referidos, y realizando el pago a satisfacción de la entidad, dentro del término que ésta le otorgue, sin que en ningún caso pueda ser superior al término de tres meses después de la

ejecutoria de la sentencia; absolvió a COLFONDOS S.A. de todas las pretensiones incoadas en su contra y en consecuencia, no profirió orden alguna en contra del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.; condenó en costas y a MARCO JAVIER GALEANO CARO en favor de BERNANDO DE JESÚS SANCHEZ VELASQUEZ y a BERNARDO DE JESÚS SÁNCHEZ VELÁSQUEZ en favor de COLFONDOS S.A, mismas que se liquidarán en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo establecido en los arts. 365 y 366 del CGP y el Acuerdo PSAA16-10554 del CSJ; compulsó copias ante la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, para que investigue los posibles delitos de falso testimonio y fraude procesal, en que pudieran haber incurrido los señores MARCO JAVIER GALEANO CARO y BERNANDO DE JESÚS SANCHEZ VELASQUEZ.

#### **1.4.- RECURSO DE APELACIÓN**

##### **Demandante**

El apoderado de la parte accionante interpone el recurso de apelación, el cual sustenta en que el despacho realizó una indebida valoración probatoria para resolver el asunto, en tanto le quita fuerza probatoria a la certificación emitida por el empleador, la cual nunca fue desconocida ni tachada de falsa por el codemandado y si bien el testigo Juan Pablo Ceballos, indicó que había sido emitida a solicitud del demandante, lo cierto es que esa certificación no sufrió reparo, aduce que si bien no fue suscrita por el demandado si fue suscrita por quien ostentaba el cargo de asistente administrativo y no quedó acreditada ninguna falsedad por parte del demandante.

Destaca que la certificación se emitió en papel de la empresa, con el logo, el nit y el sello y no puede desconocerse el valor probatorio de la misma, según la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expone que la misma no fue desvirtuada y guarda armonía con lo que declaró el testigo

Martín Echavarría, esto es que entró a trabajar en el 2007 y allí ya estaba el señor Bernardo, aduce que en la contestación de la demanda hay una aceptación de que la relación estaba vigente para el año 2000, sumado al paz y salvo emitido por el demandante en el que alude a una relación durante 18 años, documento que tampoco fue desconocido.

De otro lado, considera equivocado que se concluya que el contrato a término fijo se había terminado en diciembre de 2007 cuando no hay ningún elemento de prueba de la terminación, ni el contrato, ni el preaviso por lo cual deberá suponerse que sufrió las prórrogas hasta el año 2019, pues no obra ninguna a prueba para establecer que el vínculo se dio por terminado en diciembre de 2020.

Ultima que si hay elementos probatorios suficientes para determinar que la relación laboral comenzó en 1999 y si en gracia de discusión no se acoge esa fecha, debe tomarse que el contrato del año 2007, sufrió las prórrogas automáticas, dando darse aplicación a los principios laborales y constituciones, tiempo con el cual el señor Bernardo acreditaría las 1150 semanas que exige el artículo 65 de la Ley 100 de 1993, para acceder a la pensión bajo la figura de la garantía de la pensión mínima

Finalmente solicita se revoque la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar al demandante, pues se advierte que el único que faltó a la verdad de manera clara y evidente y con respuestas evasivas fue el señor Marco Javier Galeano como lo señaló el juez en el fallo, quien deberá ser el único investigado pues el señor Bernardo actuó bajo la buena fe.

### **1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA**

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, ninguna de las partes emitió pronunciamiento.

## **2. CONSIDERACIONES**

### **2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA**

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con los demás aspectos decididos; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

### **2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA**

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor BERNARDO DE JESUS SANCHEZ VELASQUEZ nació el de 1950, tal como se acredita con la copia de la cédula de ciudadanía, obrante a folios 11 del anexo 02.
- Que el demandante es afiliado del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, a partir del 01 de julio de 1997, según historial de vinculaciones aportado por Colfondos a Folios 16 del anexo 09 y el formulario de vinculación obrante a folios 17 ibidem.
- Que el afiliado registra un total de 619.13 semanas efectivamente cotizadas en toda su vida laboral, tal y como se desprende de la historia laboral expedida por Colfondos S.A. el 22 de febrero de 2021, visible a folios 37 del anexo 09.



### **2.3.- PROBLEMA JURIDICO A RESOLVER**

Debe determinar la Sala:

¿Si es procedente revocar parcialmente la sentencia proferida por el Juez Segundo Laboral del Circuito de Medellín, para en su lugar, declarar que entre el señor Bernardo de Jesús Sánchez Velásquez y el señor Marco Javier Gallego Caro, existió una relación laboral por el periodo comprendido entre el 22 de enero de 1999 y el 12 de marzo de 2019 o subsidiariamente entre el 16 de enero de 2007 y el 12 de marzo de 2019, y si como consecuencia, debe ordenarse el pago del título pensional al demandado por los periodos no cotizados y el reconocimiento de la pensión de garantía mínima por parte de Colfondos S.A. con la concurrencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.?

### **2.4.- TESIS**

Problemas jurídicos que se resuelven bajo la tesis según la cual no se demostró la prestación personal del servicio por parte del demandante al señor Marco Javier Gallego Caro, desde el extremo inicial pretendido, 22 de enero de 1999, no obstante, deberá tenerse por prorrogado el contrato a término fijo suscrito por las partes, el 02 de enero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2009, fecha en la cual se registran cotizaciones al sistema de seguridad social pensional por parte de A y L Apoyo Empresarial; en consecuencia la sentencia debe ser CONFIRMADA y MODIFICADA en los numerales primero y segundo para incluir dentro del periodo objeto del cálculo actuarial el comprendido entre el 01 de enero de 2008 al 30 de noviembre de 2019, así como el ciclo mayo de 2011.

### **2.5.- PREMISAS NORMATIVAS**

### ***Obligación del empleador al pago del Título pensional***

El sistema General de Pensiones, Ley 100 de 1993, en el artículo 33, determinó la procedencia de la inclusión del tiempo no cotizado para efectos del reconocimiento de la pensión de vejez, en los siguientes términos:

*“PARAGRAFO. 1o. Para efectos del cómputo de las semanas a que se refiere el presente artículo, y en concordancia con lo establecido en el literal f) del artículo 13 se tendrá en cuenta:*

*d) El tiempo de servicios como trabajadores vinculados con aquellos empleadores que por omisión no hubieren afiliado al trabajador.*

*...En los casos previstos en los literales b), c), d) y e), el cómputo será procedente siempre y cuando el empleador o la caja, según el caso, trasladen, con base en el cálculo actuarial, la suma correspondiente del trabajador que se afilie, a satisfacción de la entidad administradora, el cual estará representado por un bono o título pensional.” (Subrayado fuera de texto).*

A su vez el literal h) del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, aplicable al Régimen de Ahorro individual con solidaridad, igualmente prescribe:

*“h. Tendrán derecho al reconocimiento de bonos pensionales los afiliados al Régimen que hayan efectuado aportes o cotizaciones al Instituto de Seguros Sociales, o a las cajas, fondos o entidades del sector público, o prestado servicios como servidores públicos, o trabajado en empresas que tienen a su exclusivo cargo las pensiones de sus trabajadores y trasladen la parte proporcional del cálculo actuarial correspondiente;” (subraya de la Sala)*

De manera que, el legislador adoptó como regla general el reconocimiento del tiempo laborado sin cotización efectiva para el reconocimiento de las prestaciones a cargo del sistema de seguridad social pensional, bien porque el empleador tenía a su cargo el reconocimiento de la pensión o por la omisión en la afiliación, como es el caso planteado.

### ***Relación Laboral***

Ahora bien, es claro la obligación de pago del título pensional o cálculo actuarial, tiene su fuente en la relación laboral, en virtud de la cual el empleador está compelido a efectuar las cotizaciones al sistema en cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 17, 22 y 24 de la Ley 100 de 1993.

Debe precisarse que de acuerdo con la previsión del artículo 23 del Código Sustantivo de Trabajo, son tres los elementos que permiten la configuración de un contrato de trabajo, el primero, la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo, el segundo, la continua subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo e imponerle reglamentos, lo cual debe mantenerse por todo el tiempo o duración del contrato, y el tercer elemento, el salario como retribución del servicio.

Dado el carácter tuitivo del derecho laboral, el artículo 24 ibídem, modificado por el artículo 2 de la Ley 50 de 1990, consagra una presunción legal del elemento subordinación, una vez acreditada la prestación personal del servicio:

Frente a dicha presunción, la Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, tiene jurisprudencia inveterada y pacífica, en cuanto a cómo se distribuyen las responsabilidades probatorias, criterio expuesto entre otras, en la sentencia SL39259 del 17 de abril de 2013:

*“Lo anterior significa, que al actor le basta con probar la prestación o la actividad personal, para que se presuma el contrato de trabajo y es a la empleadora a quien le corresponde desvirtuar dicha presunción con la que quedó beneficiado el operario.*

*... Por esa razón, como con acierto lo argumenta el recurrente, en ningún caso quien presta un servicio está obligado a probar que lo hizo bajo continuada dependencia y subordinación para que la relación surgida pueda entenderse gobernada por un contrato de trabajo”. (Subraya de la Sala)*

## **2.6.- CASO CONCRETO**

En el caso sub examine el señor Bernardo de Jesús Sánchez alega un vínculo laboral con el codemandado Marco Javier Gallego Caro, entre el 22 de enero de 1999 y el 12 de marzo de 2019, en forma continua e interrumpida.

En esta perspectiva y de acuerdo con los parámetros establecidos por la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, entre otras, en las sentencias SL39259 de 2013; SL4207, SL3818 de 2022; SL 082 y SL132 de 2023, le basta probar la prestación del servicio, presumiéndose en su favor, conforme al artículo 24 del Código Sustantivo de Trabajo, la subordinación propia de la relación laboral.

No obstante, encuentra la Sala que, como acertadamente lo concluyó el juez de instancia, el pretensor no logra probar la prestación del servicio en los extremos señalados, como se desprende del análisis de la prueba recaudada, así:

-La **certificación laboral**, obrante a folios 23, expedida el 21 de febrero de 2019, en la cual se certifican los extremos pretendidos y cuya valoración judicial se cuestiona en la apelación, no constituye prueba suficiente de la prestación del servicio, en tanto, si bien es cierto, fue expedida en la papelería y con el logo del establecimiento, no está suscrita por el empleador, precisando que se trata de una persona natural y no un ente societario. Sumado a que respecto al establecimiento de comercio- taller de pintura automotriz - no existe, o por lo menos no se probó, un organigrama ni un manual de funciones

del cual se derive la competencia del empleado que la firma, para emitir la certificación y el procedimiento interno de constatación de la información.

De otra parte, la declaración del señor JUAN PABLO CEBALLOS MONCADA, decretada como prueba de oficio por el a quo, quien se desempeña como asistente administrativo y fue quien suscribió el documento en mención, desvirtúa que el empleador haya tenido conocimiento o intervención en la expedición y la determinación del contenido de la certificación, pues éste declaró que fue un favor que le realizó al trabajador, para efectos de la solicitud de un préstamo o arriendo y que fue el señor Bernardo Sánchez quien le suministró las fechas, no teniendo conocimiento de las mismas, dado que se vinculó en el año 2018; declaró igualmente que no solicitó autorización al señor Marco Javier Gallego. Frente a este punto confrontado el demandante manifestó que es cierto que solicitó el favor al señor Ceballos Moncada que le expidiera la certificación, la cual necesitaba para solicitar un préstamo a efectos de comprar unos materiales, pero niega que haya sido él quien suministró las fechas del vínculo y afirma que no sabe de dónde las sacó el señor Juan Pablo Ceballos.

De manera que aun aceptando que la actuación del empleado Juan Pablo, Ceballos, vincula al empleador, y la fuerza persuasiva que ha reconocido la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia a las certificaciones laborales (véase sentencias SL4735 de 2017; SL2728 y SL4474 de 2021; SL3350, SL3983, SL4148, SL4296 de 2022 y SL076 de 2023, entre otras), lo cierto es que en el caso subexamine, quedó desvirtuada la certeza de los extremos que se declaran en la certificación.

En esta dirección se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 2880 de 2022.

*“Tal constancia al emanar del empleador, en principio daría certeza sobre lo que allí se acredita, en este caso en particular, sobre el momento hasta el cual*

*habría prestado servicios la demandante, esto es, se entendería que hasta el 7 de noviembre de 2001 por ser la fecha en que se expidió tal certificación. Pues, de acuerdo con la jurisprudencia, el juez laboral debe tener por cierto el contenido de lo que se exprese en las constancias de trabajo expedidas por el empleador. Sin embargo, en este caso, dado que las pruebas recaudadas en sede de instancia no corroboran lo allí certificado, y que, además, las restantes pruebas obrantes en el plenario advierten situaciones específicas que restan credibilidad sobre el extremo final consignado, se puede afirmar que el medio probatorio reseñado no resulta sólido sobre este tópico.” (subraya de la Sala)*

Resta anotar que el testigo Martín Emilio Echavarria Cano, no da cuenta de los extremos del vínculo laboral pues solo afirma que el señor Javier Gallero, le arrendó un local en el taller en el año 2007 y que en ese momento el hoy demandante ya laboraba para el codemandado, pero no sabe cuando empezó la relación laboral o si la misma tuvo interrupciones, porque en sus palabras, él estaba dedicado a su trabajo y no se daba cuenta.

- Igualmente, las **historias laborales que obran a folio 29 del anexo 001, folio 17 del anexo 009 y en el anexo 013**, reportan una información contradictoria con la tesis del demandante, en tanto éste registra afiliaciones con otros empleadores en periodos en los cuales, según su versión, laboraba para el codemandado ininterrumpidamente.

Empleador	Periodo	Folios
Egal Ltda	01 de julio de 1997 al 24 de enero de 1999	Folio 17 anexo 009
Egal Ltda	01 de diciembre de 2009 al 31 de enero de 2011.  <i>Pago por acreditación efectuado el 30 de abril de 2018</i>	Folio 17 anexo 009 y 29 anexo 002
Asociación para el Desarrollo del	01 de febrero de 2010 al 28 de febrero de 2011	Folio 17 Anexo 009 y 29 anexo

Despl		002
A y L Apoyo Empresarial	01 de febrero de 2011 al 30 de noviembre de 2015	Folio 29 anexo 002 Folio 17 Anexo 009
Bienraíz Ingenieros	Del 01 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2016	Folio 29 anexo 002 Folio 17 Anexo 009
Textiles y confecciones Costur	01 al 30 de marzo de 2016	Folio 29 anexo 002 Folio 17 Anexo 009
Marco Javier Galeano Caro	01 de abril de 2016 al 01 de abril de 2019	Folio 29 anexo 002 Folio 17 Anexo 009

Las inconsistencias antes reseñadas, impiden ordenar el pago del título pensional por el periodo comprendido entre el 22 de enero de 1999 y el 30 de noviembre de 2009, tal y como fue pretendido por el recurrente, nótese que incluso el periodo correspondiente a octubre de 2011 que incluyó el a quo en los ciclos sobre los cuales se debe liquidar el cálculo actuarial, aparece pagados por A y L Apoyo Empresarial, no obstante, como tal punto no fue apelado por el codemandado no puede modificarse la decisión, advirtiéndose que la cotización simultánea solo tiene efectos sobre el ingreso base de cotización y no respecto al número total de semanas.

Ha de precisarse, asimismo, que no se planteó ni acreditó en el proceso que alguna de estas sociedades actuara como intermediaria para la afiliación al sistema de seguridad social, y que además lo fuera respecto al codemandado Galeano Caro, como tampoco la existencia de contratos simultáneos.

En perspectiva de lo anterior, debe la Sala remitirse al material probatorio dentro del cual se aportó contrato de trabajo a término fijo suscrito ente el accionante y el señor Marco Javier Gallego Caro, el 02 de enero de 2007 el cual fue glosado a folios 12 y 13 del anexo 002 y las siguientes liquidaciones de prestaciones sociales, pruebas que demuestran que en esos lapsos el demandado fue empleador del promotor del proceso.

- 05 de enero al 30 de diciembre de 2011 (folios 17, anexo 0002)
- 01 de enero al 22 de diciembre de 2012 (folios 18, anexo 0002)
- 01 de enero al 27 de diciembre de 2013 (folios 19, anexo 0002)
- 04 de enero al 31 de diciembre de 2016 (folios 20, anexo 0002)
- 10 de enero al 23 de diciembre de 2017 (folios 21, anexo 0002)
- 01 de enero al 12 de marzo de 2019 (folios 22, anexo 0002)

También se aportaron comprobantes de egreso por pago de nómina semanal, de folios 47 a 172, que dan cuenta de la existencia de la relación laboral en el periodo comprendido entre el 09 de enero de 2016 al 25 de agosto de 2018.

Ahora bien, le asiste razón al alzado, respecto al segundo planteamiento de disenso, relativo a que debe incluirse en el cálculo actuarial el periodo posterior al 31 de diciembre de 2007, por la aplicación de las prórrogas automáticas del contrato suscrito entre las partes, dado que se encuentra que, en efecto, está demostrado que las partes suscribieron un contrato a término fijo el 02 de enero de 2007 con fecha de terminación el 31 de diciembre de la misma anualidad, en relación con el cual no se aportó prueba del aviso de no prórroga u otra forma legal de terminación del vínculo, por lo que debe entenderse que el mismo fue prorrogado, para el caso, hasta el 30 de noviembre de 1999, fecha en la cual se registra afiliación y pago de cotizaciones por la A y L Apoyo Empresarial..



En tal sentido y como lo ha precisado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia *“la prórroga de los contratos a término fijo opera automáticamente por voluntad de la ley, y que lo que debe expresarse por escrito, dentro de la oportunidad prevista en la norma, es la intención de no prorrogarlo o, lo que es lo mismo, de terminarlo cuando finaliza su plazo, en la forma como antes quedó explicado”* (SL22242 de 2017)

Por lo demás, la carga de la prueba de la comunicación de no prorroga corresponde al empleador, puntualizando que en las probanzas recaudadas no solo no hay prueba que el contrato no fue prorrogado, sino que no existe evidencia que desvirtúe la prestación del servicio en esos periodos, pues lo mismos no fueron objeto de cotización al sistema.

En torno a los otros los periodos que indica el extremo activo como faltantes, solo es posible tener en cuenta el ciclo mayo de 2011, equivalente a **4.29** semanas, partiendo de los extremos declarados por el a quo, que incluyen algunos de estos periodos, subrayando que el ciclo enero de 2011, aparece pagado por el empleador *“Asociación para el Desarrollo del Despl”* y enero y febrero de 2016, cotizado por las empresas *“Bienraiz Ingenieros”* y *“Textiles y Confecciones Confur”*

En consecuencia, se modificará el numeral segundo del fallo para ordenar el pago del título pensional por el periodo 02 de enero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2009 y el ciclo mayo de 2011, confirmando los demás periodos incluidos.

Importa anotar, que las semanas a incluir corresponden a **181.44** semanas, que sumadas a las **619.43** que acredita el señor Bernardo Sánchez Velásquez, en la historia laboral más actualizada, arroja un total de **799.06**, que resultan insuficientes para acceder al derecho a la pensión por garantía mínima regulada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Finalmente, en relación con la orden de compulsar copias a la Fiscalía para que investigue al demandante por los presuntos delitos de falso testimonio y fraude procesal, aspecto que se controvierte también en apelación, considera la Sala que tal actuación no es de orden judicial sino administrativo y por ende no puede esta Sala decisión revocarla, atendiendo a que lo que se ordena es que el ente acusador adelante las indagaciones necesarias en orden a establecer si el demandante y el señor Javier Galeano Caro, faltaron a la verdad en sus respectivos interrogatorios, sin que ello signifique un juicio de responsabilidad penal de los mismos.

De otra parte, la compulsa de copias se cumple en desarrollo del deber legal que tienen todos los funcionarios judiciales de poner en conocimiento de las autoridades competentes, las conductas que puedan ser constitutivas de conductas punibles y aunado a que se observa que la misma se perfeccionó el 17 de noviembre de 2022, según se constata en el expediente digital.

Conforme al análisis precedente, la providencia de primera instancia debe ser MODIFICADA en los numerales primero y segundo, CONFIRMÁNDOLA en lo demás.

Sin costas en esta instancia por la prosperidad parcial del recurso.

### **3.- DECISIÓN**

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

#### **FALLA:**

1.- Se **MODIFICA** el numeral primero de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Segundo Laboral de Circuito de Medellín, el 10 de octubre de 2022, en el proceso ordinario instaurado por el señor BERNARDO DE JESUS SANCHEZ VELASQUEZ en contra de la COLFONDOS PENSIONES Y CESANTIAS S.A. y el señor MARCO JAVIER GALLEGU CARO, en el cual se integró el contradictorio con LA NACION MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO en el sentido de declarar que entre las partes existió un contrato a término fijo del 2 de enero de 2007 hasta el 30 de noviembre de 2009; un contrato a término indefinido del 5 de enero de 2011, hasta el 27 de diciembre de 2013 y un contrato a término indefinido del 4 de enero de 2016 hasta el 12 de marzo de 2019.

2. Se **MODIFICA** el numeral segundo de la sentencia de primera instancia en el sentido de condenar al señor MARCO JAVIER GALEANO CARO, a realizar el pago de los aportes en pensiones del señor BERNANDO DE JESÚS SANCHEZ VELASQUEZ, durante los siguientes periodos del 2 de enero de 2007 al 30 de noviembre de 2009; octubre y mayo de 2011, 60 días; julio y diciembre de 2012, 60 días y mayo y octubre de 2013, 60 días.

2.- Se **CONFIRMA** en lo demás la sentencia de primera instancia.


3.- Sin costas en esta instancia.

4.- Se ordena la devolución del expediente digital, con las actuaciones cumplidas en esta instancia, al Juzgado de origen.

El fallo anterior será notificado a las partes por Edicto de conformidad con el numeral 3° literal d) del artículo 41 del Código Procesal del Trabajo y la

Seguridad Social y el auto AL 2550 del 23 de junio de 2021, proferido por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.


Los Magistrados,



SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO